JUZGADO VEINTIOCHO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD

Medellín, diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro

Proceso	Ejecutivo
Demandante	Lina Marcela Blandón Castañeda
Demandado	Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas
Radicado	05001 40 03 028 2024 00506 00
Providencia	Conflicto de Competencia

Mediante auto del 12 de febrero del año que avanza, el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, resolvió declarar la falta de jurisdicción para conocer del presente asunto en razón a que *“la Resolución N° 04102019-528131 del 1 de abril de 2020 expedida por la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (...) no deviene de un contrato estatal, sino que se trata de un acto administrativo por medio del cual se reconoció una suma de dinero a su favor por concepto de indemnización por vía administrativa en el marco de la reparación integral a que tienen derecho por ser víctimas de desplazamiento. Por lo tanto, el conocimiento del presente asunto no está en cabeza de esta jurisdicción, sino que la misma radica en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil.”*

De esa manera, luego de invocar la cláusula general o residual de competencia, ordenó remitir la demanda a la Oficina de Apoyo Judicial para que sea repartida a los JUECES CIVILES MUNICIPALES DE MEDELLÍN.

Al respecto, el Juzgado estima pertinente realizar las siguientes:

CONSIDERACIONES:

Se ha reiterado que el Juez está en la obligación de interpretar la demanda. En STC6507-2017 se explicó:

“...el juez debe interpretar la demanda en su conjunto, con criterio jurídico, pero no mecánico, auscultando en la causa para pedir su verdadero sentido y alcance, sin limitarse a un entendimiento literal, porque debe trascenderse su misma redacción, para descubrir su naturaleza y esencia, y así por contera superar la indebida calificación jurídica que eventualmente le haya dado la propia parte demandante.”

En el presente caso, los accionantes están formulando *“demandada por el medio de control ejecutivo”* con base en la Resolución N° 04102019-528131 del 1 de abril de 2020 expedida por la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS mediante el cual se les reconoció el derecho a recibir una indemnización administrativa por valor de 27 SMLMV. En ese sentido piden que se libere mandamiento de pago por dicha suma de dinero.

En el auto de fecha 12 de febrero de 2024, el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN encaminó su argumentación atendiendo de forma literal y expresa lo pedido por los demandantes, para concluir que no nos encontramos ante un título ejecutivo que provenga de un contrato estatal.

Ahora, lo primero a considerar es si realmente se trata i) de un documento que preste mérito ejecutivo y, ii) si es la acción ejecutiva la procedente para su cobro.

Es que la misma resolución indica que el pago de la indemnización está sujeto o depende de un ORDEN DE PRIORIZACIÓN que se definirá a través de la aplicación del método técnico de priorización. Además, *“los montos y orden de entrega de la medida de indemnización administrativa depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad, de igual forma, la entrega de la indemnización administrativa depende de que se cuente con un estado de inclusión en el Registro Único de Víctimas.”*

Ello, permite concluir que acá NO se aportó un título ejecutivo, ya que ninguna de tales condiciones se ha surtido, o al menos, no se encuentran acreditadas. Ello descarta de entrada que sea el proceso EJECUTIVO el pertinente para forzar el pago de esa suma de dinero, porque obviamente no se pueden pretermitir u obviar las etapas claramente definidas por las normas que rigen la indemnización administrativa.

Al respecto, en el Auto 331 de 2019, la Corte Constitucional reiteró que en los trámites que se adelantan para satisfacer la indemnización administrativa debe garantizarse el debido proceso de las personas involucradas, en los siguientes términos:

“(...) se debe dar certeza a las víctimas sobre: (i) las condiciones de modo, tiempo y lugar bajo las cuales se realizará la evaluación que determine si se priorizará o no al núcleo familiar según lo dispuesto en el artículo 2.2.7.4.7 del Decreto 1084 de 2015; (ii) en los casos en que sean priorizadas, la definición de un plazo razonable para que se realice el pago efectivo de la indemnización; y (iii) los plazos aproximados y orden en el que de no ser priorizados, las personas accederán a esta medida. Por lo anterior, no basta con informar a las víctimas que su indemnización se realizará dentro del término de la vigencia de la ley.”

Ni siquiera por acción de tutela se puede exigir una fecha exacta de PAGO:

“(...) fijar un plazo para pagar la indemnización administrativa, excede las facultades del juez constitucional y suplantaría las funciones asignadas por ley a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, además de comprometer el

presupuesto de la entidad y vulnerar el derecho de igualdad de quienes se encuentran a la espera de un turno para recibirla.¹

La Corte Suprema de Justicia en STC10014-2022 igualmente explicó:

“Para el cumplimiento de lo anterior, conforme la contestación ofrecida por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, es indispensable realizar la aplicación del "Método Técnico de Priorización" en el caso de los gestores, con el fin, se reitera, de establecer el "orden de desembolso" de la "indemnización", claro está que para ello la Unidad tiene en cuenta las "variables demográficas, de estabilización económica, características del hecho victimizante y avance de la ruta de reparación", previstas en el anexo de la Resolución 1049 de 2019.

Por eso es que, la intervención del juez constitucional para ordenar el "pago inmediato de la indemnización administrativa" no solo podría poner en riesgo el derecho a la igualdad de las demás "víctimas" que se encuentran en turno de recibir el "resarcimiento económico" y frente a las cuales ya se agotó el "Método Técnico de Priorización", sino, además, estaría invadiendo competencias que son del resorte exclusivo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, a quien se le confió la importante labor de evaluar "técnicamente" la "priorización" en el desembolso de la "indemnización administrativa".

Por lo tanto, respetuosamente considera este Despacho que la motivación del JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN no atendió los reales fundamentos fácticos de la demanda, en concreto a la naturaleza especial de los dineros que se reclaman, ya que asumió desde un primer momento que estaba ante un proceso ejecutivo.

Así las cosas, si bien no se afirma en este momento que el asunto que se pone a consideración de la Judicatura sea competencia del Juzgado Administrativo, sí es a él a quien le corresponde emitir una decisión que resuelva de forma material la solicitud y permita determinar la acción procedente y al funcionario competente para conocerla, por habersele asignado inicialmente.

En todo caso, el art. 104 del CPACA, *“La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa”, lo que descarta que sea este Juzgado Civil el competente para conocer y decidir dicha problemática.*

Por lo tanto, este Despacho se abstendrá de asumir el conocimiento de la presente acción, y planteará conflicto de competencias entre distintas jurisdicciones, para lo cual ordenará remitir el

¹ Tribunal Superior de Medellín – Sala Quinta de Decisión de Familia, Acción de tutela, Rdo. 050883110002 2023 00628 01, Sentencia del 15 de noviembre de 2023

expediente a la CORTE CONSTITUCIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 11 de la Constitución Política.

Por lo expuesto, el Juzgado.

RESUELVE:

Primero: DECLARAR que este Despacho Judicial carece de competencia para el conocimiento de la demanda antes referenciada, por las razones antes expuestas en la motivación.

Segundo: PLANTEAR el CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA surgido entre este Despacho y el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN.

Tercero: DISPONER la remisión del expediente a la CORTE CONSTITUCIONAL, para dirimir el conflicto de competencias entre distintas jurisdicciones.

NOTIFÍQUESE,

15.

Firmado Por:
Sandra Milena Marin Gallego
Juez
Juzgado Municipal
Civil 028 Oral
Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **fd98368a7ff853de8065ed6f1f847770b0b33ef22f771f96db34b607b1b8c5f7**

Documento generado en 19/03/2024 07:32:16 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>